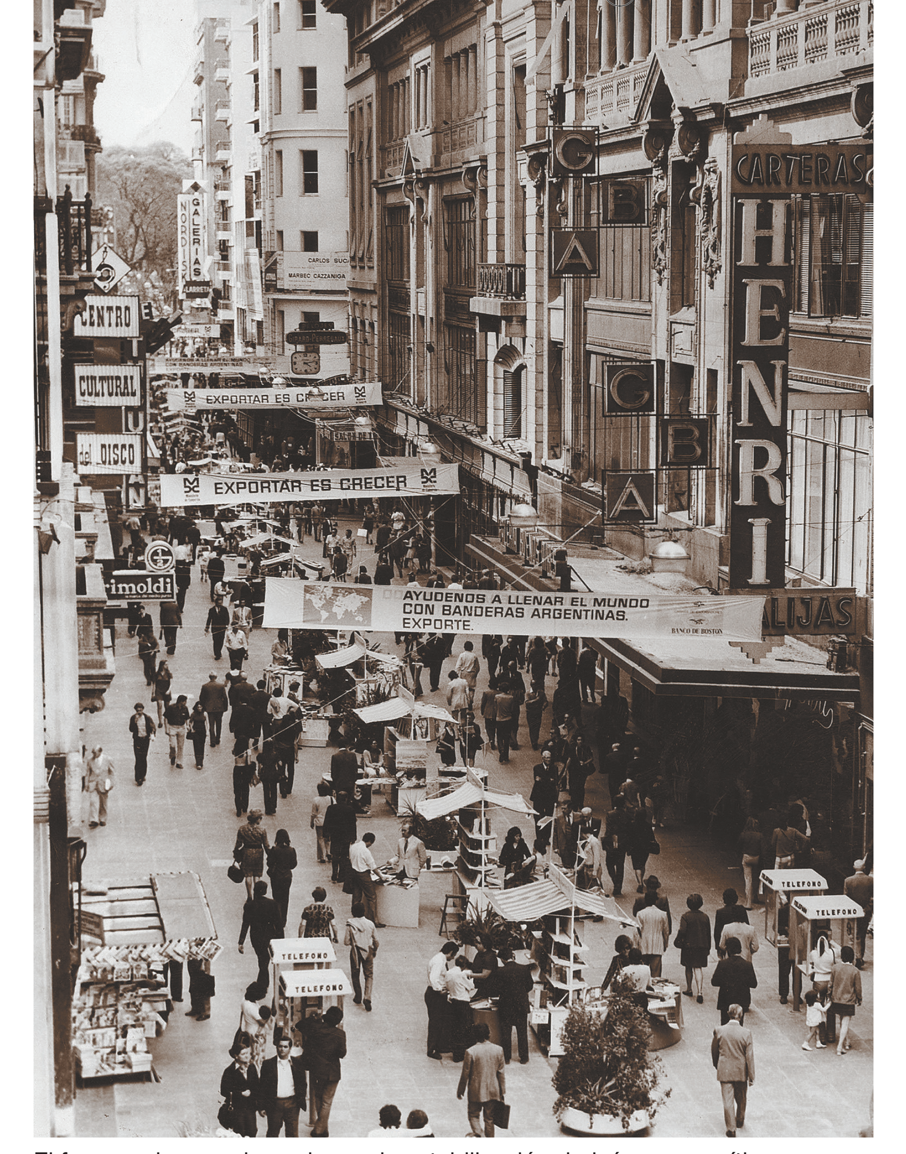
HISTORIA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA DEL SIGLO XX

Página|12



46

LA HIPERINFLACIÓN Y EL FIN DEL GOBIERNO DE ALFONSÍN



El fracaso de sucesivos planes de estabilización derivó en una crítica coyuntura política y económica durante la administración alfonsinista.

Staff

Director de la colección: Alfredo Zaiat

Director académico: Mario Rapoport
Coordinador: Ricardo Vicente
Colaboradores:
Andrés Musacchio
Eduardo Madrid
Hernán Braude
Agustín Crivelli
Martín Fiszbein
Pablo López
María Cecilia Míguez
Florencia Médici
Leandro Morgenfeld
Pablo Moldovan
Carolina Pontelli
Asistente de dirección: Natalia Aruguete

Director general: Hugo Soriani
Rumbo de diseño: Alejandro Ros
Diagramación: Juan Carlos Aguirre
Asistente de fotografía: Omar Chejolán
Coordinación general: Víctor Vigo

E-mail: *historiaeconomica@pagina12.com.ar*

Historia de la economía argentina del siglo XX
Mario Daniel Rapoport
1a. ed. - Buenos Aires: La Página, 2007.
16 p.; 28x20 cm.
ISBN 978-987-503-451-8
1. Investigación Periodística.
CDD 070.43
Fecha de catalogación: 03/08/2007



El ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille, y el secretario de Hacienda, Mario Brodersohn, lanzaron el Plan Primavera para superar la frustración del Plan Austral.

1 Programas de estabilización
El Plan Primavera

La década del ochenta fue un período de gran inestabilidad internacional. El desbalance comercial provocado por el segundo shock petrolero de 1979 condujo a los países desarrollados a incrementar sus tasas de interés. El objetivo de esa medida era solucionar los desequilibrios en sus balances de pagos. Las economías latinoamericanas, que se habían endeudado mucho en los años previos, sufrieron el impacto de ese ajuste porque la deuda estaba atada a tasas variables. Ese aumento, impulsado principalmente por la Reserva Federal (banca central de Estados Unidos), les multiplicó la carga financiera. Esto generó un estrangulamiento externo en la región que condujo a la moratoria mexicana de 1982 –anticipada por la debacle argentina de 1981–, que rápidamente se transformó en la "crisis de la deuda" en América latina.

La falta de liquidez mundial, el desfavorable ciclo de precios internacionales y el elevado grado de endeudamiento externo generaron una situación insostenible para la mayoría de las economías de la región. Este cuadro se tradujo en lo que se conoció como "la década perdida" debido al mediocre crecimiento de esos países durante ese período. Las políticas que condujeron al estallido hiperinflacionario se dieron en el marco de importantes restricciones externas, limitaciones que los países de la región afrontaron de diferente manera y con resultados disímiles.

Brasil, México, Bolivia y Perú implementaron importantes planes de estabilización orientados a encontrar una solución al problema de la inflación y a los desajustes macroeconómicos. De la misma manera, las presiones sobre los precios durante la segunda mitad de los setenta y los ochenta condujeron a la necesidad de planes de estabilización en otras latitudes, por ejemplo en Israel.

En el caso argentino, si bien el estallido hiperinflacionario comenzó a partir de la fuerte suba de precios de 1989, a lo largo de toda la década del ochenta las políticas económicas de los diversos equipos que ocuparon el Palacio de Hacienda tuvieron entre sus objetivos fundamentales el control de la inflación. Ya desde mediados de 1982 el país registraba tasas de inflación mensuales de dos dígitos.

El fracaso de los sucesivos intentos de estabilización y la adversa coyuntura externa llevaron a una crítica situación política y económica. Ante este escenario, en agosto de 1988, frente a una infla-

ción semestral superior al 400 por ciento, el amotinamiento de militares y huelgas de diversos sectores, el equipo económico de Juan Vital Sourrouille lanzó un nuevo plan de estabilización, conocido como Plan Primavera. Este fue lanzado por el gobierno en un momento de debilidad política por los malos resultados en la renovación de las autoridades legislativas, provinciales y municipales de las elecciones de 1987.

El plan reunió las características principales de los anteriores programas de estabilización, pero su principal novedad fue el fuerte énfasis en el control del déficit público. Más allá de la modificación de los precios relativos, se propuso una serie de reformas tendientes a reducir los gastos corrientes del Estado y a incrementar sus ingresos.

El equipo económico impulsó una reforma cambiaria a fin de captar una porción de los recursos generados por las exportaciones. El nuevo esquema implicó el desdoblamiento del tipo de cambio en uno "libre" y otro "comercial". Por este último se liquidaban las exportaciones. La medida apuntaba a generar un aumento en los ingresos del Banco Central. Al mismo tiempo se incrementaron las tarifas de los servicios públicos y se racionalizaron fuertemente los gastos en inversión pública.

El programa contó con el apoyo del Banco Mundial, que se comprometió a realizar un importante desembolso para 1989, y de un amplio abanico de organizaciones empresariales, entre las que destacaban la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por otro lado, encontró una fuerte oposición de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y de otras entidades agropecuarias, que interpretaron el desdoblamiento del tipo de cambio como un impuesto a las exportaciones de hecho y, por lo tanto, como el incumplimiento de compromisos pactados por parte del gobierno.



Raúl Alfonsín, cuando fue abucheado en el discurso en la Exposición Rural de Palermo, observado por el presidente de la SRA, Guillermo Alchouron.

El Plan Primavera contempló acuerdos de precios en contraposición a los congelamientos de los planes anteriores. Como quedaría en evidencia rápidamente, esos acuerdos descansaban en la voluntad del sector privado, que fue accionando paulatinamente para imponer conquistas que lo beneficiaran, despojando de esta manera a las autoridades de ese instrumento de estabilización. Con respecto a los salarios, el reestablecimiento a fines de 1987 de la libre negociación no permitió al gobierno congelar los ingresos de los trabajadores, aunque se esperaba que se ajustaran a los acuerdos de precios con las empresas.

El nuevo Plan derivó en una alianza del gobierno con los grupos más liberales del empresariado. Fuera de la misma quedaron las cámaras agropecuarias, las pymes y los trabajadores. Correspondió a la CGT desplegar la oposición más dura a una política que convertía a los salarios en la principal variable de ajuste. Saúl Ubaldini, titular de la central obrera, anunció un plan de lucha y un paro de ocho horas que se concretó en septiembre de 1988 y contó con el apoyo de sectores excluidos de la alianza articulada por el gobierno. La represión a los disturbios durante el acto realizado el día del paro dio lugar a la convocatoria del decimotercer y último paro general promovido por la CGT durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

> El Plan Primavera fue lanzado por el gobierno en un momento de debilidad política por los malos resultados de las elecciones de 1987.

Por su parte, la protesta del sector agropecuario fue inmediata y se prolongó hasta fines de la administración alfonsinista. Se multiplicaron las demandas de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y la Federación Agraria Argentina a favor de la unificación del tipo de cambio. Bajo el agobio de la crisis fiscal, el gobierno se negó a implementar esa medida que hubiera recortado sus ingresos. Como consecuencia, esas corporaciones acordaron la realización de un paro de actividades.

En agosto de 1988, el presidente Alfonsín fue abucheado durante la 102ª Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería e Industria celebrada de la SRA. El canciller Dante Caputo calificó el hecho como "una actitud grotesca y grosera, típica de una chusma inaceptable para los argentinos, que expresa la angustia de un sector incapaz, especulativo e inútil, adulador de dictadores e inspirador de la tortura".



Juan Carlos Pugliese reemplazó a Sourrouille. "Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo" fue la célebre frase de su gestión al frente de Economía.

2 El fracaso de la política económica
Renuncia el equipo de Sourrouille

A fines de 1988, a pocos meses de lanzar el Plan Primavera, la administración radical soportaba desequilibrios en las principales variables económicas. En el ámbito externo, el ahogo generado por el pago de la deuda externa y el desfavorable ciclo de precios internacionales significó una preocupante reducción de las reservas en poder del Banco Central. Además, la banca acreedora había suspendido el cronograma de desembolsos. En dicho contexto, y pese a la decisión del gobierno de mantener los pagos a organismos multilaterales de crédito, en septiembre de 1988 se frustró la posibilidad de lograr un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional.

En el plano fiscal, la inflación, el atraso tarifario, la reducción en el nivel de actividad y los rumores de una posible moratoria tributaria comenzaron a erosionar los ingresos al Tesoro Nacional. En un marco caracterizado por la imposibilidad de acceso al crédito internacional y la dificultad de controlar el déficit público, el Banco Central recurrió en forma creciente a la emisión monetaria y de títulos, con tasa de interés cada vez más altas, como mecanismo compensatorio. Dichas tasas contribuyeron a una reducción del nivel de actividad económica, lo que agravó la situación fiscal. Además, esas tasas en alza junto con la fijación del tipo de cambio alentaron el ingreso de capitales "golondrina". De esta manera, se fueron financiando a muy corto plazo los desequilibrios en el mercado de divisas, acrecentando el problema de la deuda externa e incorporando un fuerte componente especulativo a la economía. Como si fuera poco, el país padecía las consecuencias de una crisis energética que implicó la realización de cortes rotativos en el suministro de electricidad, perjudicando el nivel de actividad económica y la popularidad del gobierno.

El desasosiego económico se veía, a su vez, agravado por la conflictividad de la situación política. La probable derrota electoral del radicalismo en las elecciones presidenciales, la inestabilidad generada por los levantamientos militares, las tensas negociaciones con la oposición en torno de los proyectos de ley impulsados por el oficialismo y los enfrentamientos con los gobernadores provinciales por la coparticipación de impuestos fueron algunos de los múltiples flancos de batalla que debió atender la administración alfonsinista. Todo esto se tradujo en una notable disminución de sus márgenes de acción política. En dicho contexto, Alfonsín decidió adelantar para mayo la elección presidencial de 1989 con el objetivo de que la crisis económica no afectara las posibilidades de triunfo del candidato radical Eduardo Angeloz.

El contexto de alta inestabilidad condujo a que en noviembre de 1988 se registrara una primera corrida contra el austral, que la autoridad monetaria logró controlar gracias a la venta de dólares en el mercado libre. Al mes siguiente se produjo un nuevo levantamiento militar, esta vez encabezado por Mohamed Alí Seineldín. Al poco tiempo se escucharon las primeras críticas de la UIA al atraso cambiario y a las altas tasas de interés. Dicho reclamo se sumó a la fuerte oposición que las entidades del sector agrope-



Alfonsín abraza en la jura a Jesús Rodríguez, ministro de Economía de transición hasta la entrega anticipada del poder a Carlos Menem.

cuario sostenían contra el programa económico.

En enero de 1989 el Banco Mundial decidió suspender el desembolso de fondos comprometido, oficializando así el retiro de su apoyo al gobierno radical. En esas condiciones, se acrecentó la debilidad de la administración alfonsinista y las expectativas de devaluación comenzaron a incrementarse entre los principales operadores económicos. Una nueva corrida especulativa contra el austral se registró a mediados de mes y poco a poco el gobierno comenzó a perder los escasos apoyos con los que hasta entonces contaba.

En los últimos días de enero de 1989, al violento copamiento del regimiento de La Tablada por parte de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), se sumó un nuevo ataque especulativo contra la moneda nacional. El Banco Central respondió, al igual que en los casos anteriores, ofreciendo reservas y títulos con alto rendimiento: en menos de quince días se vendieron más de 900 millones de dólares y la situación ya se tornaba insostenible. El 6 de febrero el presidente del BCRA, José Luis Machinea, suspendió la venta de divisas debido a la insuficiencia de reservas en las arcas de la autoridad monetaria. Dicha fecha marcaría el fin del plan de estabilización y la implementación de una nueva reforma cambiaria encarada por Sourrouille. Las medidas consistieron fundamentalmente en una triple división del mercado de divisas y en una devaluación inicial del 12 por ciento para el dólar oficial, que sería ampliamente superada por la evolución en los mercados especial y libre.

Los factores que desencadenaron la corrida cambiaria poniendo fin al Plan Primavera e inaugurando los movimientos especulativos que desembocarían en la hiperinflación fueron variados. Se destacaron el rol jugado por el clima de alta incertidumbre política que afrontaba el gobierno ante la falta de apoyos internos y externos, el público conocimiento que por entonces existía sobre la escasa capacidad de respuesta del BCRA, las fuertes expectativas devaluatorias entre los operadores económicos debido a la apreciación del austral, y la evidente incapacidad del Plan Primavera para estabilizar las principales variables macroeconómicas.

El equipo económico intentó contener la burbuja especulativa a través de la emisión de títulos ajustados por la cotización del dólar a fin de ofrecer sustitutos de la divisa que frenaran la fuga. Sin embargo, pese al crecimiento en la colocación de deuda, esas iniciativas se mostraron poco efectivas para controlar la cotización del dólar libre, que continuó su escalada.

Pese a la crítica situación cambiaria, la inflación de febrero se mantuvo al margen de lo sucedido con la cotización del dólar (el IPC se incrementó un 9,6 por ciento), en gran parte debido a que las transacciones comerciales se liquidaban en los mercados regulados a valores mucho más bajos que las del mercado libre. Dicha situación acrecentó las presiones de los exportadores por la unificación cambiaria, medida que contaba con el apoyo de los principales candidatos a la presidencia (Carlos Menem, Eduardo Angeloz y Alvaro Alsogaray).

Los poseedores de divisas presionaron para lograr la unificación y liberalización de los mercados cambiarios y comenzaron a retener los dólares generados por el comercio exterior. Ese comportamiento agudizó la estampida de la cotización del dólar. En marzo, en medio de rumores sobre bancarrotas bancarias, y al tiempo que el lapso mínimo de maduración de los plazos fijos superaba los comicios presidenciales, se produjo un retiro masivo de depósitos que agravó aún más la situación del mercado cambiario. En ese mes, la inflación comenzó a elevarse casi duplicando los registros de febrero, situación que condujo al candidato presidencial del oficialismo a pedir la renuncia del equipo económico.

El 31 de marzo, en un contexto de elevada inestabilidad, asumió como ministro de Economía el hasta entonces presidente de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Pugliese. El nuevo ministro decidió una nueva reforma cambiaria que retornaba al anterior esquema dual, acompañada con una devaluación y la aplicación de retenciones a las exportaciones. A partir de ese momento, la estrategia de Pugliese consistió en un progresivo vuelco de las divisas provenientes de las exportaciones al mercado libre a fin de incrementar la oferta y dar respuesta gradual a los reclamos de unificación. Sin embargo, la creciente liquidación de divisas en el mercado libre estrechó el vínculo entre la dinámica del dólar y los precios internos, registrándose en abril una contundente alza de 33,4 por ciento en el IPC y de 58,0 por ciento en el Indice de Precios Mayoristas.



La hiperinflación provocó una profunda recesión, elevado desempleo y un escenario social muy conflictivo.

3 Fuga de capitales y caos social
Las consecuencias de la híper

Más allá de la cifra puntual del índice de precios, el comienzo del proceso hiperinflacionario se ubica en abril, momento en que la dinámica de formación de precios se dolariza y los salarios comienzan a negociarse ya no sobre la base de la inflación pasada, sino sobre las expectativas de precios corrientes. Desencadenado ese proceso, la estrategia de las empresas consistió en recurrir a subas de precios, así como a una importante reducción de la oferta a fin de conservar su stock, o sea su capital de trabajo. Por su parte, los trabajadores presionaron por pagos de salarios quincenales y en algunos casos hasta semanales a fin de evitar que la inflación licuara sus ingresos.

El 3 de mayo se unificó y liberalizó el mercado cambiario, lo que dio lugar a importantes subas del dólar y de los precios. Satisfechos en sus reclamos, los operadores económicos "contestaron con el bolsillo y no con el corazón", que fue la apelación del ministro Pugliese al mercado, comenzando una monumental fuga de capitales que agravó aún más la crisis. A partir de ese momento, la situación social comenzó a tensarse.

El 14 de mayo se realizaron las elecciones presidenciales en las que se impuso con el 47 por ciento de los votos la fórmula justicialista encabezada por Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Días antes, el 10 de mayo, se registró en Rosario una primera movilización en protesta por la suba de precios. El clima social fue creciendo en intensidad, desembocando en una serie de manifestaciones populares que incluyeron saqueos y ataques a comercios en los principales centros urbanos del país.

En consonancia con la crítica situación de la economía y la caída del salario, la destrucción de puestos de trabajo se tornó cada vez más grave. El desempleo alcanzó en mayo al 8,1 por ciento de la población económicamente activa. Frente al caos social, el 29 de mayo, Alfonsín decretó el estado de sitio, medida que sería ratificada días después por el Congreso y que regiría por más de dos meses. Como consecuencia de la represión policial para detener los saqueos, catorce personas perdieron la vida y centenares resultaron heridas.

Ante el evidente fracaso de la liberalización cambiaria, y luego de intentar un aumento de las retenciones, rechazada por los representantes agropecuarios, Pugliese abandonó la cartera de Economía y pasó a ocupar el Ministerio del Interior. En su lugar asumió el joven diputado radical Jesús Rodríguez, quien dispuso una fuerte devaluación, un estricto control de cambios y la suba de las resistidas retenciones a las exportaciones.

Tras la devaluación de la primera semana de junio, la dinámica del dólar comenzó a estabilizarse en simultáneo con el establecimiento de un estricto control sobre los retiros de depósitos bancarios. A su vez, el presidente electo, Carlos Menem, anunció un gabinete del agrado de los sectores empresarios, en el que se destacaba la protagónica presencia de algunos destacados miembros de Bunge & Born, uno de los más poderosos grupos económicos locales. Sin embargo, en ese mes se registró una impresionante suba de precios: el IPC alcanzó el 114,5 por ciento. Ese índice fue el resultado de un reposicionamiento del sector privado ante los anuncios de un nuevo plan de estabilización por parte de la administración entrante, el denominado Plan Bunge & Born.

A fines de junio, en medio del descontrol de pre-

cios y ante la imposibilidad de acordar un programa de transición que garantizara la gobernabilidad, Alfonsín decidió abandonar anticipadamente su cargo. El 30 de junio llegó al Senado la carta de renuncia y ocho días después se produjo la asunción anticipada de Carlos Menem. La inflación arrojó en julio la cifra más alta como respuesta a la suba de las tarifas públicas establecida por el nuevo equipo económico. A partir de ese violento ajuste la dinámica de precios se estabilizó.

A lo largo de los casi cuatro meses que duró la hiperinflación, la variación del tipo de cambio y el aumento de precios se retroalimentaron. Entre las consecuencias más destacadas de la hiperinflación que heredó el nuevo gobierno se encontraban:

- El bajo nivel alcanzado por los salarios, que se ubicaron sistemáticamente por debajo de la variación de los precios.
- El abultado endeudamiento interno generado por la política de emisión de títulos indexados por el tipo de cambio.
- La cesación de pagos de la deuda externa.
- La crítica situación de reservas del BCRA.

La experiencia hiperinflacionaria no sólo coronó una década signada por el estancamiento, cuyas principales víctimas fueron los sectores populares, sino que tiñó de frustración los resultados que en lo económico arrojara el primer gobierno tras el fin de la dictadura militar. El espíritu optimista de la renovación alfonsinista bajo el lema "con la democracia se come, se cura, se educa", pronto dio paso a una frustrante realidad que dejaba al descubierto la existencia de numerosos problemas que la sociedad argentina aún debía resolver.

Uno de los elementos centrales que quedaron en evidencia a lo largo de esa década fue el surgimiento de un pequeño grupo de conglomerados económicos nacionales y extranjeros denominado Grupo María, con poder de veto sobre las acciones de gobierno. Se reconfiguró así la capacidad del Estado de imponer su autoridad sobre el sector privado, con las consecuentes implicancias políticas de este fenómeno. El acercamiento de la gestión económica a esos poderosos conglomerados, con el propósito de consensuar las medidas aplicadas, fueron una muestra elocuente de ese proceso.

La crisis hiperinflacionaria fue a la vez continuidad y ruptura respecto del pasado. Continuidad en cuanto evidenció, una vez más, la raíz externa del conflicto por la dependencia de la economía respecto de la disponibilidad de divisas. Y ruptura, en la medida en que dicha dependencia no se vinculaba ya a los procesos de crecimiento desequilibrado que dieron lugar a los ciclos de *stop and go*, sino más bien a las nefastas consecuencias que el proceso de endeudamiento generó sobre la economía.

GA LE RIA

Los Capitanes

El poder

Las transformaciones estructurales impuestas por la última dictadura militar cuentan entre sus principales consecuencias la considerable pérdida de protagonismo del sector industrial. La implementación de un nuevo modelo económico conformó un escenario adverso para el desenvolvimiento de la actividad industrial, que afectó al principal protagonista de la anterior fase de crecimiento. También requirió del establecimiento de una serie de alianzas que reconfiguraron el mapa de los grupos de presión, cuyo principal resultado fue la consolidación del poder de influencia de un reducido número de grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.

Fueron diversos los mecanismos que posibilitaron la transferencia de recursos que garantizaban el apoyo de importantes facciones del capital al nuevo modelo. Los subsidios a las inversiones productivas privadas y la apertura comercial tomaron un carácter fuertemente asimétrico, generando un impacto diferencial sobre las distintas ramas y beneficiando especialmente a las actividades extractivas y a las manufacturas basadas en el uso de recursos naturales. Estos sectores continuaron ejerciendo su poder monopólico en un contexto donde el resto de la economía fue disciplinado por la competencia extranjera.

Los subsidios a las exportaciones, el régimen de promoción industrial, los sobreprecios pagados por las compras realizadas por las empresas públicas, las facilidades crediticias y el apoyo estatal a la concentración y diversificación de esos grupos, constituyeron los principales mecanismos para consolidar ese bloque de poder. Entre sus beneficiarios se destacaron Celulosa Argentina, Acindar, Alpargatas, Loma Negra, Perez Companc, Bunge & Born, Techint, Macri, Ledesma, Atanor, Noel, Arcor y Garovaglio y Zorraquín, entre otros.

Uno de los mecanismos que consolidaron la alianza tejida entre las más poderosas fracciones del capital y quienes dirigían el aparato estatal fue la socialización del endeudamiento externo privado. El seguro de cambio y la posterior estatización de la deuda privada licuaron los pasivos de las empresas, condicionando desde entonces las finanzas y la capacidad de intervención del Estado nacio-

de la Industria



Carlos Bulgheroni, titular de uno de los principales grupos económicos. Dueño de Bridas, del banco BIBA y Papel de Tucumán, luego se volcó al negocio petrolero.

nal. Ese endeudamiento se concentraba en un reducido número de empresas, que a finales de 1983 daban cuenta de más de un tercio de la deuda privada total.

La consecuente reestructuración empresarial tuvo su expresión en la constitución del denominado Grupo María, también conocido como los "Capitanes de la Industria". No era un grupo homogéneo, y confluían dos grandes sectores: los conglomerados que habían surgido durante la etapa sustitutiva y que lograron subsistir por sus privilegiadas relaciones con el poder militar y por su capacidad de adaptación, y los vinculados con las actividades agropecuarias, comerciales y financieras emergentes mayoritariamente durante el modelo agroexportador. La homogeneización del poder económico se dio a través de la convergencia de los dos grandes sectores en torno de la valorización financiera y, en menor medida, a través de la incursión en la actividad agropecuaria de los grupos surgidos durante la industrialización por sustitución de importaciones.

El proceso de expansión de esos grandes grupos económicos fue desarrollando sus propias contradicciones, que se manifestaron en una fuerte disputa en torno de la orientación de las políticas públicas durante el gobierno de Alfonsín. El enorme incremento del endeudamiento externo y sus efectos sobre las arcas públicas impidieron continuar con el esquema de subsidios a la producción industrial, delimitando un eje de conflicto en el interior de los sectores dominantes, en el que se contraponían los intereses de la "patria contratista" con los de los acreedores externos.

El gobierno radical intentó una salida diseñando programas de capitalización de deuda, promoviendo la privatización de empresas públicas (Aerolíneas Argentinas y ENTel) e impulsando, a partir del Plan Primavera, una fuerte contracción del gasto público. No obstante, dichas medidas se enfrentaron con la resistencia de los grupos económicos que se beneficiaban con el esquema de subsidios, que se alinearon entonces junto a la oposición política y sindical.

El estallido hiperinflacionario puso de manifiesto la contradicción en el seno de los grupos de poder. La escalada de los precios de 1989 estuvo precedida por una fuerte puja en el mercado cambiario, motorizada inicialmente por la corrida realizada por las entidades financieras tras el retiro del apoyo externo. Sin embargo, la crisis cambiaria se vio incentivada tras la ruptura del Plan por la reticencia de los grandes exportadores a liquidar divisas. Las fuertes presiones por la unificación cambiaria y la devaluación favorecieron a los sectores exportadores, agravando el peso de la deuda externa y disminuyendo la remisión de ganancias de las empresas transnacionales. A partir de entonces la contraposición de intereses condujo a un reordenamiento de los grupos económicos. Una de las fracciones quedó en cabeza del tradicional sector agroexportador. La alianza del Grupo Bunge & Born con el futuro gobierno de Carlos Menem, al disponer primero a Miguel Roig y luego a Néstor Rapanelli como ministros de Economía, dio cuenta de dicha transformación.

Tras el fracaso del Plan BB, piloteado por dicho grupo, y la puesta en marcha de la convertibilidad, algunos miembros de "los capitanes" lograron rearticular sus negocios y su poder de influencia sobre el Estado. Sin embargo, en el nuevo contexto de profundización de las reformas, de las privatizaciones y continuidad del endeudamiento externo y fuerte desindustrialización se desarrolló un proceso de aguda extranjerización del aparato productivo local, que reorganizó nuevamente el bloque de poder económico.

Saúl Ubaldini, líder de la CGT y máximo referente de la oposición a lo largo del gobierno de Raúl Alfonsín.



La oposición sindical

Saúl Ubaldini fue entrevistado por el profesor Ricardo Vicente en julio de 1999, cuando ocupaba una banca de diputado nacional, para un proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la UBA, y publicada luego en **Página/12** el 27 de noviembre de 2006. Ese reportaje es un valioso documento que permite comprender ese convulsionado período de la historia económica argentina.

En el primer tramo de la gestión del presidente Raúl Alfonsín se promovió una ley de "normalización sindical". ¿Cuáles fueron los fundamentos de la oposición sindical?

–El proyecto de normalización sindical conocido como ley "Mucci", por el apellido de su ministro de Trabajo, tenía como antecedente el decreto 969/66 dictado por el gobierno radical de entonces, que fue calificado como "decreto mordaza" por el movimiento obrero. Nuestra oposición, democrática por cierto, radicó en que se pretendía la fragmentación del movimiento obrero. En su esencia responde de manera similar a la filosofía de la última ley de reforma laboral del gobierno actual (*se refiere al de Carlos Menem*).

A mediados de 1984, el gobierno de Alfonsín abrió una etapa donde hubo varios intentos de concertación con empresarios y gremialistas. ¿Por qué fracasaron?

–Lamentablemente, el gobierno del doctor Alfonsín no logró, pese a nuestra aspiración, articular mecanismos de concertación social, tal vez por influjo de algunos sectores económicos dominantes.

Se ha argumentado que las numerosas huelgas generales dispuestas por la conducción cegetista contribuyeron a la erosión del gobierno radical. ¿Qué evaluación le merece? ¿Cómo puede explicar la pendularidad sindical entre esa actividad huelguística y los diversos acercamientos en búsqueda de una concertación?

–Probablemente las medidas de acción directa resueltas por la CGT durante la gestión del doctor Alfonsín hayan influido en el deterioro de su gobierno,

pero todos y cada uno de esos movimientos respondieron a la necesidad de tutelar las conquistas y los derechos de los trabajadores, ya que ése es el rol específico de la conducción sindical. Nosotros cumplimos con el mandato de los trabajadores. También paramos en defensa de la democracia en la asonada golpista de Semana Santa. En cuanto a la pendularidad, considero que no debe tener una carga peyorativa. El movimiento obrero argentino siempre busca el diálogo y la concertación. Cuando no se dan los resultados confronta. Creo, por otra parte, que ésa es la metodología correcta. Ni solo confrontar ni solo dialogar.

En los primeros años de la gestión del presidente Menem la política laboral fue claramente ofensiva hacia el movimiento sindical. Sin embargo, en contraste con lo sucedido durante el gobierno de Alfonsín, hubo una absoluta pasividad en materia de huelgas generales. ¿A qué factores atribuye ese comportamiento?

–A nadie se le escapa que la CGT Azopardo cuestionó siempre las medidas del gobierno del doctor Menem en cuanto lesionaban derechos de los trabajadores. No es cierto que hubo absoluta pasividad. Le recuerdo que el 21 de marzo de 1990 realizamos el primer acto masivo en repudio a la política de privatizaciones. El 9 de noviembre de 1992 se hizo el primer paro general y de ahí en más el movimiento obrero protagonizó muchas jornadas de lucha de toda índole, incluyendo por supuesto paros generales, como fueron los de septiembre de 1995, el mismo mes de 1996, y el de diciembre de ese año.

Desde 1955, la CGT experimentó varias divisiones. ¿Cómo explica la que se produjo en 1989 durante un gobierno que poco antes había ganado las elecciones con el apoyo del sindicalismo peronista?

–En el movimiento obrero históricamente coexistieron quienes tienen mayor inclinación hacia el diálogo y quienes lo tienen hacia la presión. Si las medidas de acción directa no fueron más, o no incluyeron a todos, creo que debe haber sido porque algunos compañeros todavía confiaban o tenían esperanzas en el origen peronista de ese gobierno.

Finalmente, ¿qué factores contribuyeron a la desarticulación de la CGT durante el gobierno de Menem?

–Sobre la CGT Azopardo le quiero contar que

> El gobierno de Alfonsín no logró, pese a nuestra aspiración, articular mecanismos de concertación social, tal vez por influjo de algunos sectores económicos dominantes.

siempre anidó en mi espíritu la idea de la necesidad de unidad del movimiento obrero, y más específicamente de la conducción, ya que en las bases lo están. La experiencia indica que cuando los dirigentes sindicales se unen es cuando se defienden con mayor eficacia los intereses de la clase trabajadora. Fue precisamente por esta filosofía que en 1992 se desintegran los dos sectores, Azopardo y San Martín, y se reunifica en una sola CGT. Observe cuánta verdad hay en esta afirmación que a partir de la unidad se opera la primera huelga general el 9 de noviembre de ese año.



Durante el primer gobierno democrático después de la dictadura, la CGT dispuso 13 huelgas generales. En el gobierno de Carlos Menem no hubo tantos paros.



“El Plan Austral fue un error de política económica”

Guillermo Vitelli es licenciado en Economía Política de la UBA y se desempeña como miembro de la Carrera de Investigador Científico del Conicet. Fue investigador visitante en el Institute of Development de la Universidad de Sussex (Gran Bretaña), profesor de la Universidad Nacional Autónoma y de El Colegio de México, de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, y consultor de la Cepal. Actualmente revista como profesor titular en las universidades nacionales de Buenos Aires, Lanús y Lomas de Zamora. Es autor de varios libros y trabajos sobre la economía del cambio tecnológico, los ciclos inflacionarios, la historia económica de la Argentina, la corrupción y los negocios.

¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para comprender el episodio hiperinflacionario de mediados de 1989?

–La primera particularidad de la primera de las dos hiperinflaciones argentinas es que ocurrió en un contexto dominado por otras híper en América latina, como la peruana, la boliviana y la brasileña. Parece evidente que existe un componente externo ineludible para explicar el fenómeno. Sin embargo, no se registraron situaciones similares en México, Venezuela, Colombia, Chile y Uruguay. Todos ellos pudieron al menos frenar el embate externo. Si bien es cierto que existieron factores externos, también los hubo de carácter interno. La combinatoria de ambos planos explicó su ocurrencia.

¿Cuáles fueron los principales disparadores externos de la hiperinflación?

–La deuda externa fue el principal condicionante de las economías de la región. La mayoría de los países tomaron deuda a tasas variables. El cambio en el contexto internacional producido en la primera mitad de la década del ’80 implicó la absorción de un costo financiero considerable, más alto que el original. A esto se sumó la caída en los precios de los commodities, provocando la moratoria con los acreedores externos a fines de 1989.

¿Y los determinantes internos?

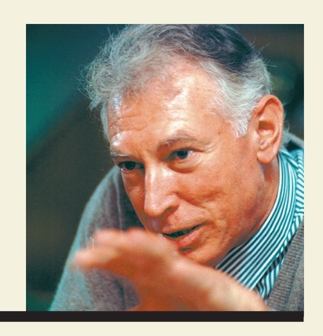
–Los factores asociados a la lógica de la política económica interna no fueron intrascendentes. Uno de los errores mayores de política económica que tuvo la Argentina, además de la formulación de la convertibilidad, fue la aplicación del Plan Austral. Sus hacedores tenían el convencimiento de que resolvían todo con el movimiento pautado de los precios relativos y que eso se decidía en una oficina del octavo piso del Ministerio de Economía. Esa era, sin duda, una combinatoria de soberbia y de concepción de la autoridad económica que tuvo un elevado costo. Sin embargo, y a pesar de los errores cometidos, Alfonsín los llamaba el equipo de lujo.

¿Por qué vincula el Plan Austral a la hiperinflación?

–La razón de la primera híper enraizada en la lógica del Plan Austral se deriva del encadenamiento de planes de ajuste que contabilizó la economía argentina. Mi interpretación es que todas las hiperinflaciones ocurrieron al momento de ruptura de un plan de ajuste o de un plan de estabilización, que fueron sinónimos. El quiebre de los planes comienza siempre con una corrida contra la moneda local a la cual intentan responder los bancos e incluso el gobierno aumentando las tasas de interés para retener a los capitales líquidos que procuran salir. La suba en el costo del dinero se observa casi siempre acompañada de un desajuste de los precios internos –siempre de tipo inflacionario– y de una aceleración en la entrada de capitales especulativos de muy corto plazo. Este financiamiento es transitorio y de alto costo para la economía, agudizándose la situación de crisis. Es así que ante pequeñas variaciones en las percepciones o en las tasas de interés, los capitales ingresados procuran rápidamente huir del país imponiendo nuevas alzas de las tasas para contener el drenaje. En algún momento la renta del capital financiero deja de ser creíble a los ojos de los actores económicos y se quiebra la idea de que al elevar los tipos de interés ingresan capitales y la moneda se revalúa. Se pasa así de una curva donde la relación entre el tipo de cambio y la tasa de interés es negativa a una en que es positiva. En ese momento, el aumento del costo del dinero y sus altos niveles absolutos pasan a ser formadores de expectativas devaluatorias que agudizan el drenaje de divisas.

¿Qué ocurrió a partir del fracaso del plan económico del equipo de Sourrouille?

–La ruptura del Plan Primavera se formalizó el 6 de febrero de 1989, cuando el ministro de Economía Juan Vital Sourrouille y el presidente del Banco Central José Luis Machinea decidieron que la autoridad económica no intervendría más en el mercado



cambiario. Esa fecha marca el inicio de una carrera contra la moneda local y de una fuga de capitales frente a un Banco Central sin reservas que duraría, en su primer tramo, al menos seis meses. El pasaje a precios de la crisis cambiaria se explicitó desde entonces a tasas de inflación mensuales de hasta el 35 por ciento, pero no a tasas de hiperinflación, que son definidas a partir de 50 por ciento mensual. Las tasas hiperinflacionarias surgieron cuando a la crisis cambiaria y al deterioro de los ingresos del Estado generado por la inflación se le agregaron una fuerte devaluación, una recomposición pautada de precios internos, y sobre todo un aumento de tarifas para remediar la situación fiscal altamente deficitaria.

¿Cuál es la diferencia entre la primera hiperinflación y la que se dio meses después en el gobierno de Menem?

–Mi impresión es que las dos híper tienen diferentes raíces. La segunda consiste en una licuación de activos financieros. Allí la hiperinflación fue un claro instrumento de política económica decidido desde el Estado. En cambio, la primera tuvo su génesis en ese encadenamiento de planes al tiempo que se formulaba una nueva recomposición alcista de los precios.

¿Qué sucedió entre esos dos procesos?

–En el lapso entre las dos híper se gestaron políticas claramente corporativas. Con el lanzamiento del plan Bunge & Born (BB) hacia julio de 1989 se logró una pequeña estabilización, a pesar de haber inducido previamente el salto hiperinflacionario en la tasa de incremento de los precios durante mayo y junio. Pero se quebró rápidamente por la lógica de intereses de los actores partícipes de las decisiones de política económica. En la economía argentina siempre ha existido una nítida estacionalidad de precios en diciembre. La cosecha fina se recoge en enero y había obligación de liquidar las divisas logradas desde las exportaciones. Esta situación convertía a la Sociedad Rural en la principal institución que presionaba por la devaluación, ya que en ese momento una depreciación del peso mejoraba la capacidad adquisitiva del sector frente al resto de la sociedad. Esa devaluación se concretó al tiempo que funcionarios del holding Bunge & Born manejaban la política económica del gobierno. B&B era el sector demandante por excelencia de la devaluación porque era uno de los principales exportadores de cereales, y el mismo ministro Rapanelli estructuró el esquema de la devaluación desde su ministerio. Fue la antesala de la segunda hiperinflación, la de marzo de 1990.

¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores de la crisis hiperinflacionaria?

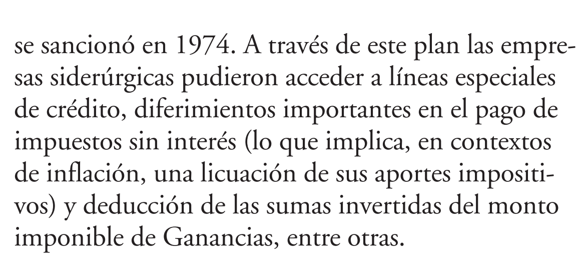
–Muchas veces podemos pensar la economía en términos del juego de la perinola. Ganan todos o pierden todos. Da la sensación de que, desde una mirada macroeconómica, con la híper perdieron todos. Cuando suceden desajustes de precios de esa magnitud, lo que se generaliza son las estrategias defensivas para resguardar el patrimonio propio. Estas lógicas de pensamiento, que resultan racionales a nivel individual, generan a nivel social un fuerte deterioro. Se frena la acumulación, se reducen los ingresos personales y fiscales y se cae en una situación de rezago respecto de las otras naciones que siguen creciendo normalmente. La realidad fue evidente. Pocos años después, superada la crisis, fue notorio que la mayoría de los actores económicos se había empobrecido.

¿Por qué piensa que con el paso del tiempo logró instalarse la idea de que el responsable de la crisis era el Estado y que la forma de resolver las crisis era con reformas estructurales y el ajuste del sector público?

–Las reformas de los noventa no son una consecuencia de la hiperinflación. Ya en 1986 se recomendaban la apertura comercial y financiera y las privatizaciones. Eso era formulado antes de las híper de Brasil, de Perú y de Argentina. En mi opinión, esas reformas poco tienen que ver con la crisis a pesar de haber sido ésta el legitimador para su aplicación. Provienen de la lógica de rapiña de los grupos políticos y de negocios que se insertaron en el Estado desde los años setenta, y que luego se acentuó. El objetivo de las reformas era el pago de la deuda externa y estuvieron basadas sobre el dominio ideológico –no cuestionado– del neoliberalismo. En ese marco, grupos de negocios se aprovecharon para beneficio propio del aparato del Estado. Pero el proceso dependió en mucho de las lógicas internas de cada país. En Brasil, Uruguay y Chile eso no ocurrió, o al menos no tuvo la intensidad de la Argentina. En cambio, aquí dominaron las mafias insertas en los gobiernos, producto de la salida apresurada del gobierno de Alfonsín.

APOS TI LLAS

El Grupo Techint
Primus inter pares

Roberto Rocca, titular de Techint hasta su fallecimiento, en 2003.

La historia del Grupo Techint (GT) pone en evidencia buena parte de los vaivenes de la economía y de la sociedad argentina de los últimos sesenta años. El origen del GT se remonta a 1946, cuando Agostino Rocca, un ingeniero italiano de 51 años, llegó a la Argentina. Agostino había luchado en la Primera Guerra Mundial, y con el arribo de Benito Mussolini al poder ocupó cargos públicos en el gobierno en el área industrial. Finalizada la guerra emigró a nuestro país, donde llevó adelante sus negocios gracias a sus contactos con otro emblemático industrial argentino, Torcuato Di Tella, quien años atrás se había contactado con él movido por sus planes de comenzar a fabricar acero en Argentina.

En 1949 se inauguró el Gasoducto Presidente Perón, una monumental obra de ingeniería que conectaba a Comodoro Rivadavia y Buenos Aires a través de unos 1700 km de tubos provistos, en parte, por el GT, que en aquel entonces se dedicaba a importar tubos desde Italia, aprovechando los contactos del fundador de la empresa. Techint había concretado así su primera gran operación comercial con el Estado.

En ese contexto, en 1947 se sancionó la ley 12.987, conocida como Ley Savio, que iniciaba el Plan Siderúrgico Nacional. Además, se decretó la creación de la primera usina integrada del país (Somisa), encarada por el Estado, dada la falta de un agente privado que pudiera –y quisiera– llevar adelante un proyecto de semejante envergadura. En este marco, donde el gobierno estaba decidido a impulsar la industria siderúrgica como parte de un plan nacional de desarrollo, el Grupo Techint comenzó a producir localmente lo que antes importaba.

En 1954, en la ciudad de Campana el grupo fundó la empresa Dálmine, primera fábrica de tubos sin costura de Sudamérica. Ocho años después anexó a esta planta la acería eléctrica Siderca, conformando el complejo Dálmine-Siderca, que comenzó a exportar sus productos. A fines de la década del ’60, la empresa había conseguido el apoyo estatal para la ampliación de su capacidad productiva, que incluía beneficios como la exención de derechos aduaneros sobre máquinas, repuestos y materias primas, exención del impuesto a los réditos, amortización acelerada del activo fijo, entre otros.

De todos modos, a pesar de los esfuerzos realizados, el crecimiento de la demanda siderúrgica superaba al aumento de la oferta local, lo que condujo al tercer gobierno de Perón a pensar un nuevo régimen de promoción dirigido a potenciar esa industria, que se sancionó en 1974. A través de este plan las empresas siderúrgicas pudieron acceder a líneas especiales de crédito, diferimientos importantes en el pago de impuestos sin interés (lo que implica, en contextos de inflación, una licuación de sus aportes impositivos) y deducción de las sumas invertidas del monto imponible de Ganancias, entre otras.

Aunque a partir de la última dictadura militar las políticas económicas dejaron de apoyar el desarrollo industrial, el gobierno de facto jugó un rol fundamental en el crecimiento y la consolidación del GT. En 1976, al entrar en actividad una planta de reducción directa del mineral de hierro, Dálmine-Siderca se transformó en una unidad de producción totalmente integrada. Un año después, la empresa instaló el primer laminador continuo del mundo alimentado con barras redondas y en 1978 construyó el puerto fluvial de Siderca, sobre el río Paraná en Campana. Durante ese período, se registró una fenomenal concentración del sector siderúrgico, apoyada nuevamente en enormes transferencias del sector público al privado. A partir de entonces, esa rama de actividad pasó a estar claramente dominada por dos empresas: el Grupo Techint y Acindar, cada una dominando diferentes segmentos del mercado.

El GT formó parte de los denominados “Capitanes de la Industria”. Recibió prebendas de la dictadura militar, entre las que se destacan la licuación de su deuda externa dispuesta por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo. Durante los noventa el holding iniciado por Agostino Rocca y continuado por sus hijos tuvo una fuerte participación en los negocios que se abrieron con las privatizaciones, incluyendo áreas tan diversas como telecomunicaciones, petróleo, gas, electricidad, transportes y, por supuesto, la industria siderúrgica, al adquirir la estatal Somisa.

A lo largo de estos años el Grupo diversificó sus actividades, al tiempo que encaró un agresivo proceso de trasnacionalización. Actualmente posee empresas siderúrgicas en Argentina, Brasil, Venezuela, México, Canadá, Estados Unidos, Italia, Rumania y Japón, además de oficinas y centros de servicios en muchos otros países. A nivel mundial, el Grupo Techint tiene bajo su cargo más de 45.000 empleados y sus ingresos para el 2008 se calculan en aproximadamente 20.000 millones de dólares.



Hiperinflación

Variación de indicadores clave

	IPC	IPIM	Salarios Privados	Tarifas públicas
Ene 88	9,1	12,1	12,9	5,2
Feb 88	10,4	13,4	5,8	14,0
Mar 88	14,8	16,2	12,8	19,9
Abr 88	17,2	16,8	14,6	23,5
May 88	15,7	23,3	19,2	26,1
Jun 88	18,0	24,0	14,4	19,5
Jul 88	25,6	25,0	21,4	22,6
Ago 88	27,6	31,9	23,0	30,1
Sep 88	11,7	6,4	15,8	2,8
Oct 88	9,0	4,6	14,2	4,3
Nov 88	5,7	3,9	9,2	6,2
Dic 88	6,8	5,7	11,5	4,7
Ene 89	8,9	6,9	9,8	7,0
Feb 89	9,6	8,4	4,5	9,6
Mar 89	17,0	18,9	10,1	9,9
Abr 89	33,4	58,0	29,0	20,4
May 89	78,5	104,5	46,9	48,5
Jun 89	114,5	133,5	104,1	72,0
Jul 89	196,6	209,1	143,0	328,0
Ago 89	37,9	8,5	36,0	48,0
Sep 89	9,4	2,5	23,5	0,1
Oct 89	5,6	1,5	16,9	0,0
Nov 89	6,5	1,8	24,4	0,1

Fuente: Indec y Damill & Frenkel (1990)

Impacto social

777,8%
fue la variación de **precios** acumulada entre marzo de 1989 y marzo de 1990.

8,1%
es la cifra alcanzada por la **desocupación** en el peor momento de la crisis.

18,9%
cayó el **salario real** en 1989 respecto del año anterior.

Bibliografía

ACUÑA, MARCELO LUIS, *Alfonsín y el poder económico. El fracaso de la concertación y los pactos corporativos entre 1983 y 1989,* Buenos Aires, Corregidor, 1995.
BASUALDO, EDUARDO M., *Concentración y Centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa*, Buenos Aires, UNQ ediciones, 2000.
BASUALDO, EDUARDO M.; AZPIAZU, DANIEL; KHAVISSE, MIGUEL, *El Nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.
CARRERA, NICOLÁS I; COTARELO, MARÍA C.; GÓMEZ, ELIZABETH; KINDGARD, FEDERICO M., *La revuelta argentina, 1989-1990*, PIMSA, Documento de Trabajo Nº 4, Buenos Aires, 1995.
DAMILL, MARIO y FRENKEL ROBERTO, *Hiperinflación en la Argentina: 1989-1990*, CEDES, Documento Número 62, Buenos Aires, 1990.
DAMILL, MARIO y FANELLI, JOSÉ MARÍA, *Las reformas de América Latina: de la crisis de la deuda a las reformas estructurales,* Documento CEDES, Buenos Aires, 1994.
GERCHUNOFF, PABLO y LLACH LUCAS, *El ciclo de la ilusión y el desencanto: Un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos Aires, Emecé, 2007.
MACHINEA, JOSÉ LUIS, *La crisis de la deuda, el financiamiento internacional y la participación del sector privado*, CEPAL, Serie Financiamiento del Desarrollo Nº 117, Santiago de Chile, 2002.
OSSONA, JORGE LUIS, *Empresarios, Estado y Democracia en la Argentina (1983-1989)*, *Cuadernos de Ciclos* Nº 4, IIHES, FCE (UBA), 1992.
PUCCIARELLI, ALFREDO, *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia al poder?*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006.
RAPOPORT, MARIO, *Historia económica política y social de la Argentina 1880-2003*, Buenos Aires, Emecé, 2007.
ROZENWURCEL, GUILLERMO, "Consolidación de la democracia y políticas económicas en América Latina", en Rozenwurcel, Guillermo (comp.), *Elecciones y política económica*, Buenos Aires, Ed. Norma, 2006.
VITELLI, GUILLERMO, *Cuarenta años de inflación en Argentina: 1945-1985*, Buenos Aires, Ed. Legasa, 1986.
VITELLI, GUILLERMO, *Los dos siglos de la Argentina. Historia económica comparada*, Buenos Aires, Ed. Prendergast.

Ilustraciones

(Tapa) Saqueos producidos en mayo de 1989, en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Fuente: Archivo **Rosario|12**.
(Págs. 722, 723, 727, 729, 731, 733 y 735) Archivo **Página|12**.
(Pág. 724 y 725) Archivo Télam.
(Pág. 726) Foto Víctor Bugge.
(Pág. 730) Alonso, M. E.; Elisalde, R.; Vázquez, E., *Historia Argentina y el mundo contemporáneo*, Buenos Aires, Editorial Aique, 1994.
(Pág. 734) Boletín Informativo Techint. Edición Especial, Buenos Aires, noviembre 2003.